



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO
DE FAMILIA DE BUENAVENTURA**

Buenaventura (Valle), febrero veintidós (22) del año dos mil veintiuno (2021).

*Ref. Proceso Rad. 2021 – 00023- 00
Auto de sustanciación No. 035*

Por reparto correspondió conocer de la solicitud de ejecución de la sentencia de nulidad del matrimonio Católico Contraído por MARTHA LILIANA GIRALDO ÁLZATE Y JOHN JAIRO SALGADO GUTIERREZ proferida por el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano Único de Apelación para Colombia de Cali el 20 de enero de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 42 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la Ley 25 de 1992, modificatorios, en su orden, de los cánones 146 y 147 de la norma sustancial civil, los cuales establecen que “El Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cánones y reglas, las controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva religión” y “las providencias de nulidad matrimonial proferidas por las autoridades de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará la inscripción en el Registro Civil. La nulidad del vínculo del matrimonio religioso surtirá efectos civiles a partir de la firmeza de la providencia del juez competente que ordene su ejecución”.

Mediante La Ley 20 de 1974 el Estado Colombiano aprobó Concordato y el Protocolo final, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973 entre el Excelentísimo Nuncio Apostólico y Ministro de Relaciones Exteriores, la cual fue declarada exequible mediante sentencia C-027 de 1993 en lo que atañe con la ejecución de las sentencias eclesiásticas por la jurisdicción ordinaria, especialidad familia, las disposiciones están contenidas en los artículos VIII y IX, en los siguientes términos:

*“**Artículo VIII.** Las causas relativas a la nulidad o la disolución del vínculo de los matrimonios canónicos, incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado, son de competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la Sede Apostólica*

Las decisiones y sentencias de estas, cuando sean firmes y ejecutivas, conforme al derecho canónico, serán transmitidas al tribunal superior del distrito judicial territorialmente competente, el cual decretará su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará su inscripción en el registro civil”.

Frente a este punto la Corte Constitucional, precisó que:

“Respecto de los efectos civiles de las sentencias eclesiásticas en materia de nulidad del matrimonio católico, valga anotar que ellos se confían en el artículo VIII a la potestad civil, luego está de acuerdo con la Carta. Estos efectos civiles se reafirman adicionalmente en el Protocolo Final del Concordato y de acuerdo con el cual en el acto de firma de éste los plenipotenciarios de las altas partes contratantes hacen entre otras declaraciones, que forman parte integrante del Concordato.

La mencionada Ley 25 de 1992 ratifica los efectos civiles de las sentencias religiosas de nulidad cuando previene que "Las providencias de nulidad matrimonial proferidas por las autoridades de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los cónyuges, quien decretará su ejecución **en cuanto a los efectos civiles** y ordenará la inscripción en el registro civil. La nulidad del vínculo del matrimonio religioso **surtirá efectos civiles** a partir de la firmeza de la providencia del juez competente que ordene su ejecución"(art.4).

B. En lo que toca al inciso 2° del artículo VIII del Concordato, mediante el cual se establece que las decisiones y sentencias de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la sede apostólica, una vez en firme y ejecutoriadas conforme al derecho canónico, serán transmitidas al tribunal superior del distrito judicial territorialmente competente, el cual decretará su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará su inscripción en el registro civil, debe anotarse que todo lo concerniente al divorcio de los matrimonios es del fuero del Estado, quien es el autorizado para distribuir la competencia. Serán entonces competentes en el presente caso los jueces que señale la ley. Por ello es inconstitucional la competencia acordada en el Tribunal Superior.

También debe anotarse que el "ejecutar" de que hablan tanto la norma concordataria como la Ley 25 de 1992 no significa que la función del juez civil sea simplemente la de ejecutar lo dispuesto por el tribunal eclesiástico. A éste sólo le atañe decretar la cesación de los efectos civiles del matrimonio y es el juez civil quien decidirá sobre los efectos civiles u homologará lo que en un momento dado sobre efectos civiles hubiere decidido el tribunal eclesiástico y ello en razón de que de conformidad con el inciso 10o. del artículo 42 de la Constitución Nacional todo lo referente a los efectos civiles de todos los matrimonios se rigen por la ley civil"¹.

Así mismo el artículo XXI del concordato establece que: Los funcionarios de las ramas jurisdiccional y ejecutiva del Estado, si fuere necesario, prestarán su colaboración en la ejecución de las providencias de los tribunales eclesiásticos, con el fin de proteger los derechos de las personas que podrían ser lesionadas por ejecución incompleta o fallida de tales providencias.

Con relación a esta disposición normativa, en la citada sentencia de constitucionalidad la máxima guardiana de la carta magna afirmó que: "Con todo, es claro para esta corporación que la independencia entre la jurisdicción civil y eclesiástica, no excluye la colaboración armoniosa y respeto mutuo entre la Iglesia y el Estado, debiendo eso sí, precisarse que la colaboración pregonada en dicho artículo ha de referirse a la ejecución de los efectos civiles en los casos previstos en la Carta Política, esto es, los que tienen los matrimonios religiosos y las sentencias de nulidad de estos matrimonios (art. 42)".

Resultado con lo expuesto y una vez analizadas las decisiones del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Cali, el día 20 de enero de 2021, el Despacho decretará su ejecución y realizar los ordenamientos propios de este asunto.

DECISIÓN:

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura Valle,

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR la ejecución de la sentencia de NULIDAD del matrimonio católico, celebrado entre MARTHA LILIANA GIRALDO ÁLZATE y JOHN JAIRO SALGADO GUTIERREZ, proferida por el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Cali, el día 20 de enero de 2021.

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-027 de 1993, MP. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez

SEGUNDO: ORDENAR la inscripción de la referida decisión como también de esta determinación en el registro civil de matrimonio y en los registros civiles de nacimiento, para lo cual la parte actora deberá aportar los correspondientes registros civiles de nacimiento y matrimonio en comento a efectos de librar los oficios respectivos.

Así mismo, inscribese este proveído en el libro de varios de la Notaria del Circulo de Buenaventura, conforme lo prevé el Decreto 2158 de 1970, artículo 1° Modificado por el artículo 77 de la Ley 962 de 2005.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



WILLIAM GIOVANNI AREVALO M.
JUEZ